

Las elecciones de 1958. Última farsa republicana

Jorge Renato Ibarra Guitart

Investigador del Instituto de Historia de Cuba

Las elecciones convocadas para el año 1958, previstas en el esquema electorero de la dictadura instalada por Fulgencio Batista, resultaron ser un recurso desesperado dentro de una suerte de hechicería política practicada por los principales personeros del gobierno. El régimen pretendía ganarse el favor de los Estados Unidos y como siempre, intentar crear una imagen de pretendida democracia. Pero el momento político que vivía el país conspiraba contra sus propósitos, la revolución movilizaba a importantes sectores populares decididos a producir cambios sociales de fondo.

Los partidos electoralistas en vistas a los comicios convocados para el 3 de noviembre se volcaron a la tarea de llevar a la práctica su tesis política. Habían entrado en un túnel oscuro con las miras puestas en alcanzar el poder en las urnas mientras que dictadura y revolución se desgastaban en cruenta lucha. No tuvieron en cuenta que estaban siendo un instrumento del régimen castrense. Los obstáculos que tuvieron que enfrentar en el último momento para concretar sus anhelos demuestran que su tesis era insostenible. Además, durante el proceso electoral las estructuras internas de esos partidos se resintieron por el desgaste político que venían sufriendo años atrás.

Para que las elecciones tuvieran un mínimo de garantías y se pudiera determinar el verdadero ganador, el gobierno tenía que ofrecer seguridades mínimas a los participantes. A la dictadura no le bastó con el fraude electoral en el proceso de reorganización de los partidos a fines de 1957, no le bastó con mantener suspendidas las garantías constitucionales, no le bastó con la censura de prensa, no le bastó con tener de contendientes a los partidos más débiles y desacreditados de toda la historia republicana. Batista nunca tuvo intenciones de utilizar a los partidos electoralistas como tablilla de salvación para propiciar una transición política, les sirvieron sólo para protegerse de los ataques de la opinión pública norteamericana y llegar a un nuevo entendimiento con Washington. Se iba a consumir otro engaño al país.

Los electoralistas, por el camino de las concesiones, no llegaron nunca a ser tomados en serio por la dictadura. Batista le había prometido al Departamento de Estado norteamericano que si la oposición lo solicitaba, accedería a recibir observadores internacionales en las elecciones. Los auténticos coquetearon con esa demanda, aunque nunca fue exigida como condición indispensable. Veamos un jocoso e interesante diálogo:

Antonio Lancís: Por todas las razones apuntadas yo creo, doctor, que debemos exigir del gobierno que, en prenda de buena fe, acceda a que los veedores de la OEA [Organización de Estados Americanos] fiscalicen los comicios generales.

Ramón Grau San Martín: Hay que quitar en el documento esa frase “en prenda de buena fe”.

Lancís: No entiendo, doctor.

Grau: Por la sencilla razón, querido Lancís, de que la “prenda” ya se la llevaron, y la “buena fe” no existe.¹

Aparte del tono de comedia que tenía el diálogo, divertido por cierto, cabría meditar: Si no se contaba con la buena fe del gobierno, ¿qué esperaban los auténticos de esas elecciones?, ¿por qué no se demandaba la presencia de observadores internacionales en términos enérgicos? De la manera como actuaban la “prenda” no sería entregada nunca a la oposición.

Por otro lado, el Partido del Pueblo Libre por mediación de su líder, Carlos Márquez Sterling, acusaba al gobierno ante las cámaras de televisión de robarse las cédulas electorales. Insistía en fomentar en el pueblo expectativas de solución a la crisis cubana. En sus campañas proponían aprobar medidas para crear un clima de distensión política. En el caso de Márquez Sterling la promesa más recurrida era que permanecería en el poder solamente dos años “[...] única y exclusivamente para salir del impasse”.²

Mientras, Facundo Hernández, uno de los líderes auténticos señalaba que su gestión futura en el Senado estaría

encaminada ante todo a lograr la aprobación de una ley de amnistía política:

“Cuando eso ocurra, aumentará la confianza pública y se habrá logrado la seguridad ciudadana”.³

Olvidaban que era el pueblo quien llevaba sobre sus espaldas el peso de la represión mientras ellos, con el visto bueno de la dictadura, podían darse el lujo de acceder a los medios de difusión masiva a pesar de la censura imperante. Esperaban que ese pueblo, hastiado de tanta sangre y tanta muerte, apelase al recurso más cómodo de otorgarle su voto. Pero no sabían que una buena parte del pueblo estaba comprometida con la revolución y no se iba a dejar lisonjear por políticos en franca decadencia. ¿Acaso podían creer en quienes admitían que ya el gobierno “lo había dado todo”?

Según los electoralistas, si el ambiente electoral estaba viciado, el resultado de las urnas no debía estarlo. ¿Cómo asegurar eso? ¿Podía acaso ser Batista el que propiciase unos comicios limpios? ¿Acaso podían compensar los robos de cédulas electorales del gobierno con los suyos propios? ¿Quién les iba a asegurar que la ciudadanía se replegaría ante los abusos de la dictadura y abandonaría su apoyo a la revolución? La vía escogida los había situado en una encrucijada sin escapatorias.

Pero mientras tenían lugar los robos de cédulas electorales, Carlos Salas Humara del Partido Acción Progresista (PAP) tenía la desvergüenza de hacer propaganda a favor de la solución electoral: “Las recogidas de las cédulas por el electorado en todas las juntas de la república, prácticamente resulta un verdadero y último referendo.

Quienes por avaricia o por egoísmo, por pasión o por venganza soñaron con sembrar el caos y la destrucción, han recibido el repudio popular”.⁴

Muchas cédulas en lugar de ser recogidas, como es normal, por la ciudadanía, eran robadas. El Tribunal Superior Electoral recibió diversas denuncias de robo masivo de carnés electorales. Por ejemplo, en Palma Soriano, tras una investigación efectuada por el inspector magistrado de la Audiencia de Santiago de Cuba, se pudo determinar que se habían robado 4 956 cédulas.⁵ En Sagua de Tánamo, el presidente de la Junta Municipal Electoral detectó la sustracción de 7 622 carnés, y la prensa informó que el hecho se había consumado “por dos individuos desconocidos según informa la pareja del Ejército que prestaba servicios de custodia de dicho organismo”. Ese era el Ejército en el cual tanto confiaban los electoralistas que ni podía ni quería poner orden en los comicios. En Las Tunas el presidente de la Junta Municipal reportaba que personas desconocidas sustrajeron “[...] todos los carnés existentes, así como también las libretas donde se llevaba el control de los carnés entregados”.⁶ En Yateras se informaba que “[...] personas desconocidas [...] sustrajeron la casi totalidad de las cédulas existentes en esa Junta, las que hacen un aproximado de 7 500 o más”.⁷ En Fomento se tenía conocimiento oficial de que en la Junta Municipal se había destruido toda la documentación electoral. Son tan solo ejemplos de los casos informados por la prensa, pues el fenómeno se extendía por todo el país y los reportes eran numerosos.⁸

Debemos significar que nunca se detuvo a ninguno de los culpables de esas violaciones, y ello demuestra la impunidad con que se actuaba y la complicidad de la dictadura en tales procedimientos espurios. Además, se debe considerar que tanto las juntas electorales en las distintas instancias como la guardia y custodio de estos documentos estaban en manos de representantes e instituciones del gobierno, y por lo tanto se supone que otros muchos casos de robo pudieron no ser reportados. Por otro lado, el procedimiento que se seguía una vez consumada la sustracción de cédulas no aseguraba un reordenamiento claro de los documentos electorales. En muchos casos, como las denuncias se produjeron en fecha cercana a las elecciones no se contaba con margen de tiempo suficiente para confeccionar con rigor nuevos registros de los colegios electorales, o se prescindía del trámite de ponerle fotos a los carnés lo que propiciaba también el fraude en las urnas.

La alternativa reformista conservadora de los electoralistas no sólo tenía que vérselas con las prácticas deshonestas del gobierno. Dentro de los partidos de oposición adheridos a la componenda electoral se producían serias divisiones como resultado de ambiciones de poder, escepticismo político y manejo arbitrario de las asambleas políticas. El descrédito y desgaste que manifestaban limitaba sus aspiraciones de triunfar en la consulta electoral.

Por otro lado, en las instancias municipales se van a producir fuertes rencillas alrededor de diversos aspectos que comprendían la designación

de inspectores para los colegios, la selección de los miembros de las mesas electorales y la suspensión del conteo de los votos. Esta situación se tornó compleja, en particular en la provincia de Las Villas por diversas circunstancias. En primer lugar, atendiendo a las solicitudes de los partidos políticos, la Junta Provincial decidió consultar con el Tribunal Superior Electoral sobre la necesidad de nombrar inspectores en los colegios que fuera necesario. La solicitud fue aprobada, aunque bajo ciertas condiciones que establecían que dichos funcionarios debían ser auxiliares del Poder Judicial, que prestasen servicio en la misma localidad y que se le asignase no menos de cinco colegios a cada uno. La medida no era lo suficientemente fuerte, pues las instancias superiores no se comprometían a fiscalizar el proceso en la base y el número de colegios que debía atender cada inspector era muy amplio.

En segundo lugar, otro motivo de fuertes tensiones fue la disputa en torno a las designaciones de los miembros de las mesas electorales. Las juntas provinciales electorales habían confeccionado listados del personal de mesa que fueron rechazados por las de Candelaria, Mariel, Camajuaní, San Antonio de las Vueltas, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Quemado de Güines, Rancho Veloz y Santo Domingo porque entendían que los propuestos no habían sido afiliados ni seleccionados por los partidos. En esos casos, las juntas municipales designaban personal de los partidos políticos por su cuenta o rechazaban las listas propuestas. Para resolver estos problemas se acordó designar inspectores que se ocupasen de las juntas mencionadas.⁹

Por cierto, en un esfuerzo de propaganda política fácil, Márquez Sterling y Grau dirigieron sus ataques, más que al gobierno como su oponente natural en las elecciones, a las organizaciones revolucionarias. Sabían que estas últimas constituían el futuro de Cuba y eran su obstáculo más temible. Veamos las expresiones del ex presidente en una de sus escasas presentaciones en público y la única que pudo organizar en la provincia de Oriente, en este caso en la ciudad de Holguín:

Por eso estamos aquí; para compenetrarnos con el sufrimiento de esta brava región [...] y para decir a todos que basta ya de sangre y de luto; que el drama cubano es ya tan trágico que hay que solucionarlo rápidamente por la vía civilizada de los votos [...].

Es por eso que hemos demandado del Gobierno que cumpliera su promesa de traer los observadores de la OEA [...]. Esa medida cuenta con la simpatía de todo el pueblo, inclusive con la de los que con las armas están procurando el rescate de nuestras libertades.¹⁰

¿Podrían llamarse civilizadas unas elecciones viciadas desde sus orígenes y auspiciadas por Batista? Por otro lado, para sacar ventaja electoral Grau no definía el origen de la confrontación que se había desatado en el país. Así aparecía él como un político pacífico mientras el gobierno y las organizaciones revolucionarias aparecían definidas sutilmente como los responsables de las muertes que tenían lugar. Por último, sacaba ventaja de la influencia que tenían las susodichas organizaciones en Oriente para proclamar algo incierto, pues estas

repudiaban las elecciones en su conjunto y no se habían pronunciado a favor de la presencia de observadores internacionales.

Márquez Sterling era más incisivo en su crítica contra los movimientos revolucionarios a los cuales, como hacía la dictadura, los vinculaba con el sistema comunista: “En todo momento, y en toda ocasión, en las cercanías de las elecciones hemos pedido un alto al fuego para que todos los cubanos puedan ir a votar con toda confianza. Insistir en torpedear las elecciones es un error inmenso. Creemos que aquellos que se oponen a los comicios no corresponden a la parte cubana de la insurrección sino a los intereses extranjeros del totalitarismo rojo”.¹¹

Pretender asociar el movimiento revolucionario auténticamente cubano que encabezó la lucha contra la dictadura de Batista con intereses extranjeros, así fuesen del sistema socialista, era una burda manipulación de la realidad. Pero Márquez Sterling estaba consciente de que para ascender al poder tendría que vérselas con las dos fuerzas que mantenían polarizado el conflicto cubano, tarea bien difícil: “El 3 de noviembre lograremos el impulso final. Derrotar al gobierno y a su candidatura continuista, y con ellos a todas las fuerzas de la maldad internacional, que se han apoderado de la dirección de ciertos movimientos, y que pretenden trastornar toda nuestra historia”.¹²

En efecto, la historia de una república neocolonial estaba llegando a su fin. Las organizaciones revolucionarias transformarían la realidad socioeconómica del país haciéndolo más independiente de Washington.

Por otro lado, manifestaciones más cercanas al sentir de la burguesía cubana que apoyaba la alternativa reformista de los partidos electoralistas las pudimos encontrar en algunos políticos, que a su vez eran grandes propietarios y renombrados miembros de esa clase social. Entre los primeros se destacaba Eugenio Sosa Chabau, hacendado, ganadero y candidato a senador por el Partido Unión Cubana, quien señaló: “Y si la forma correcta y legal de producir cambios en la gobernación de un país es la fórmula política, creo que a ella debemos ir todos los que pensamos detenidamente en cuánto sufren los verdaderos intereses permanentes del país”.¹³

Pero aquellos que cifraban sus esperanzas de solución de la crisis cubana en las elecciones sufrieron otro fuerte golpe de parte de la tiranía. Muy pronto quedaron al desnudo los verdaderos propósitos continuistas del gobierno: a la demanda de la oposición de reclamar la presencia de observadores internacionales la dictadura respondió dilatando la gestión encaminada a facilitar su traslado a Cuba. Una semana después de que Emilio Núñez Portuondo dirigiese la solicitud formal a la Organización de Naciones Unidas (ONU) para que designase veedores para las elecciones cubanas, todo parecía indicar que no se podría contar con ellos, lo cual motivó la reclamación formal de Grau al Tribunal Superior Electoral para que: “[...] con las facultades extraordinarias que le confiere la constitución, dicte medidas necesarias para que vengan esos observadores, tal como lo desea todo el pueblo cubano”.¹⁴

Pero la protesta de Grau no lo llevó, como en 1954, a retirarse de las elecciones en el último momento. La demanda no constituyó ni con mucho un ultimátum, esta vez los electoralistas estaban compulsados a participar en los comicios por el temor a un posible triunfo revolucionario. Pensaban que así podrían desviar el curso de los acontecimientos, y al decir del ex presidente auténtico: “Intentamos en las urnas [...] transformar el estado de arbitrariedad y atropello en que vivimos por uno de Ley y de dignidad humana”.¹⁵

¿Cómo enfrentar la arbitrariedad y el atropello si al propio tiempo eran víctimas de una farsa convocada por la tiranía? Pero de cualquier manera tenían que agotar el último de los recursos. Grau entendía que sin la presencia de los observadores internacionales los propios militantes auténticos fiscalizarían los colegios electorales, aunque no precisaba cómo podrían lograrlo. No obstante, preferían cargar con los denuestos del gobierno que retirar la última carta que jugaban para facilitarle alternativas a la república neocolonial. Estaban entre la espada y la pared, pero preferían someterse a las maniobras de la dictadura que dejarle la vía libre a las organizaciones revolucionarias.

Ante la demanda de Grau al Tribunal Supremo Electoral para que garantizase la presencia de observadores internacionales, el régimen castrense demostró una vez más su cinismo e irrespeto por la opinión pública nacional. Quedaron en evidencia los verdaderos objetivos continuistas de la casta político-militar batistiana, pues el Tribunal Superior Electoral respondió al ex presidente desestimando su solicitud

en acuerdo tomado por mayoría. Los magistrados señalaron: “Pero dejando a salvo la dignidad nacional en cuanto a la presencia de observadores extranjeros para fiscalizar los comicios que rechazaron [...] sin reserva alguna, considerando que ello merma la soberanía cubana y significa injerencia extraña en nuestros asuntos internos”.¹⁶

Otra vez la tiranía se socorría del argumento de la defensa a la soberanía nacional para salvaguardar sus intereses. Y también tomaban distancia de las peticiones del Departamento de Estado. De esta manera obligaban a Washington a tener que contar con la dictadura por encima de cualquier circunstancia y de cualquier arbitrariedad. ¿Cómo hablar de ese respeto a la soberanía que proclamaban si apenas unos días antes ellos mismos, a instancias de los Estados Unidos, se habían dirigido a las Naciones Unidas a solicitar observadores internacionales? La inconsecuencia del régimen del 10 de marzo no tenía límites, puestos al desnudo eran capaces de utilizar las más burdas justificaciones a sus posiciones.

Pero la credulidad de los electoralistas no tenía límites. Aún y cuando indirectamente admitían que la tiranía aplicaba procedimientos espurios en el proceso electoral, querían apelar al recurso último de asistir a las elecciones. ¿Acaso aspiraban a que la dictadura rindiese sus armas a los electoralistas en las urnas antes que a los rebeldes en la Sierra Maestra? Veamos las reflexiones de Márquez Sterling: “Si el gobierno ejerce fuerza o astucia, para ganar los comicios el destino de Cuba será catastrófico. Queremos declarar que no nos retiramos de la contienda electoral bajo

ningún concepto. [...]. Las responsabilidades serán de aquellos que fueren los comicios o de los que se retraigan y permitan ante la urna abandonada que los que han hecho escarnio del derecho y de la ley se apoderen nuevamente de los mandatos públicos”.¹⁷

Vanas ilusiones que se irían a pique, los políticos y los militares serviles a Batista eran parte de una casta única que se supervisaba mutuamente. El régimen castrense pretendía ganar las elecciones y presentarse ante Washington como la única alternativa posible para sus intereses en Cuba. Los Estados Unidos estaban esperando por los resultados de las elecciones como el único medio legal efectivo para solucionar la crisis cubana, mientras la dictadura aguardaba para presentarse victoriosa ante el imperio y de esa manera negociar la compra de nuevos cargamentos de armas.

No por gusto en vísperas de las elecciones el secretario de Estado norteamericano, John Foster Dulles, fue invitado a una cena por la embajada cubana en Washington. En esferas diplomáticas se interpretó este hecho como una reafirmación de la posición norteamericana de mantener vinculaciones con el gobierno establecido en Cuba. Allí Dulles propuso un brindis por Emilio Núñez Portuondo y por Batista.¹⁸

Sin descartar otras alternativas a su alcance, los Estados Unidos no dejaban de considerar las posibles opciones que le podía ofrecer la dictadura una vez efectuadas las elecciones.

Pero si las cosas no marchaban bien en el plano técnico electoral, en el plano político las incongruencias y paradojas se manifestaban de la forma

más grotesca y cínica. En ese sentido, los candidatos gubernamentales marchaban a la vanguardia. Para Guárdia Inelán era preferible no ofrecer garantías porque así no se violaba una especie de pacto secreto entre el régimen y los partidos electoralistas:

Cosa curiosísima ha resultado esto de la suspensión de las garantías, porque ello constituye la suprema garantía del electorado, porque aquí no hay que ofrecerle garantías a la oposición por parte del gobierno. Lo que ocurre es que oposición y gobierno, a la vez, están recibiendo el ataque de la insurrección que no quiere que haya elecciones. De manera que el restablecimiento de las garantías sería una suspensión de garantías a todos los cubanos que quieren el proceso comicial.¹⁹

El candidato presidencial del gobierno, en su impotencia por contener la justa rebeldía de los sectores juveniles contra la dictadura, apelaba a los descalificativos más hirientes. Sus palabras encerraban un contrasentido evidente:

Hay que salvar a esa juventud cubana, piense como piense, porque son las víctimas de las pasiones desatadas. No pueden representar ningún ideal. Por el contrario, son enemigos de la Patria, del orden, de la ley, del derecho, de la libertad, de la vida y de los sentimientos cristianos [...]. Son los padres, los maestros, los profesionales, los obreros, los industriales, las asociaciones cívicas, la prensa, las instituciones de todos los órdenes, la ciudadanía en pleno la que tiene

que movilizarse inmediatamente para dar la batalla de la paz.²⁰

¿Con qué moral la dictadura, por boca de Andrés Rivero Agüero, iba a convocar a la ciudadanía, a la sociedad civil para contener los arrestos de una juventud que había rescatado la vergüenza nacional? ¿Acaso contaron con esa ciudadanía cuando dieron el golpe de Estado? ¿Acaso respetaron a la sociedad civil cuando reprimieron las actividades de las instituciones cívicas? ¿A qué aspiraba la dictadura, a la paz de los sepulcros? No contentos con haber burlado en varias oportunidades la voluntad de diálogo de los partidos tradicionales, pretendían reeditar la fórmula mezquina propuesta en el diálogo cívico que convocó la Sociedad de Amigos de la República (SAR) en 1956: “La tesis correcta y responsable es plantear la posibilidad de una Asamblea Constituyente, como vía para arribar a un acuerdo que traiga la paz. Pero esta posibilidad exige un requisito previo, que los que quieren llegar al poder por las armas las depongan”.²¹

En definitiva, las elecciones fueron ejecutadas el 3 de noviembre de 1958, el voto fue obligatorio²² y los candidatos presidenciales por los distintos partidos y coaliciones fueron los siguientes:

- Andrés Rivero Agüero y Gastón Godoy y Loret de Mola por la Coalición Progresista Nacional que integró a cuatro partidos: Partido Acción Progresista, Partido Liberal, Partido Demócrata y Partido Unión Radical.

- Ramón Grau San Martín y Antonio Lancís Sánchez por el Partido Revolucionario Cubano (Auténticos).

- Carlos Márquez Sterling y Rodolfo Méndez Peñate por el Partido del Pueblo Libre.

- Alberto Salas Amaro y Miguel Ángel Céspedes por el Partido de Unión Cubana.

- El Partido Nacionalista Revolucionario no constituyó su Asamblea Nacional y por tanto, no tuvo reconocimiento, aunque en algunos municipios hizo postulaciones.²³

El resultado inmediato de las elecciones estaba previsto de antemano, la maquinaria electoral fraudulenta y represiva del régimen garantizó el triunfo de la casta político-militar de la dictadura. Apenas transcurridas las primeras veinticuatro horas, el propio Batista se apresuró a informar la victoria del candidato presidencial del gobierno en la farsa electoral: “La ciudadanía respondió al insólito reto, dejando su elocuente respuesta en las urnas [...]. Los partes que se vienen ofreciendo [...] arrojan datos que nos permiten suponer el triunfo del candidato que lleva la coalición de los partidos en que se apoya mi gobierno”.²⁴

Además, desde los primeros momentos se anunció que la llamada Coalición Progresista Nacional ganó la primera mayoría senatorial y la alcaldía de La Habana.²⁵

Era el fin de las esperanzas para la alternativa reformista conservadora representada en los partidos de oposición electoralistas. La urna les dictó una dura sentencia después de pretender por diversas razones que el resultado les sería favorable. Su mayor error fue admitir que la dictadura supervisara el proceso electoral y dictara las pautas sobre cómo debía consultarse a la opinión nacional. Unos comicios convocados

sin garantías constitucionales, sin libertad de prensa y con la ausencia de observadores internacionales tenía que producir otro engendro más de la tiranía. Eso sin mencionar los continuos fraudes que venían realizándose desde fines de 1957 cuando se convocó a la reorganización de partidos. El mecanismo consultivo no podía estar ajeno a esas realidades ni tampoco al hecho de que la mayor parte del pueblo rechazaba las fórmulas y campañas electorales de los políticos, desacreditados después de largos años de desgaste de sus prácticas demagógicas.

Una vez consumado el fraude del gobierno, los principales candidatos de los partidos electoralistas de oposición, Grau y Márquez Sterling, reaccionaron de distinta forma. Grau se pronunció abiertamente contra el resultado de las urnas y denunció las maniobras continuistas de la dictadura, por ello señaló: “Ha sido igual que en 1954. En aquella ocasión me retiré de la lucha por estimar que no había garantías suficientes pero ahora no lo hice porque había otros candidatos y la retirada habría sido inútil. Todo ha sido una farsa”.²⁶

El veterano político, aunque repudió el resultado de las urnas, no explicó a fondo la razón de su participación en los comicios, en el 1958 había menos garantías que en 1954, y en realidad el candidato al poder más temido por Grau era la revolución. Por eso participó en las elecciones, pensando que Batista aceptaría un revés en estas antes que su derrota definitiva en el campo de batalla. Márquez Sterling, por su parte, aceptó el trago amargo sin atreverse a denunciar el fraude electoral. De inme-

diato se parapetó tras una posición conformista y reasumió las prácticas politiqueras de otros momentos: “De la noche a la mañana nos hemos convertido en el primer organismo político de la oposición y el segundo en popularidad. Debimos haber alcanzado el poder el 3 de noviembre, pero no hemos quedado muy distantes”.²⁷

A partir de ese momento, Márquez Sterling se dispuso a la tarea de atraer a los congresistas auténticos a las filas del partido que dirigía, el Partido del Pueblo Libre. Por otro lado, los voceros de la dictadura explicaron el fracaso de sus oponentes en las urnas a partir de las actividades de las organizaciones revolucionarias. En un editorial, José Suárez Núñez planteaba: “Es que los insurreccionalistas, con la amenaza, la intimidación, la propaganda clandestina [...] le estaban haciendo un flaco servicio a la oposición, porque con la abstención, estaban favoreciendo al gobierno”.²⁸

Evidentemente, los políticos electoralistas, del gobierno y de la oposición, habían perdido la noción de cómo consultar a la opinión pública nacional. Las elecciones, en el contexto histórico en el cual fueron convocadas y bajo normas capaces de favorecer que se medrase con los destinos del país por medio de la represión y el fraude, no podían constituir una sana expresión de los deseos del pueblo cubano. Antes bien eran una deformación de las aspiraciones del cubano promedio, por eso los electoralistas no podían ofrecer una solución constructiva a la crisis cubana. Así, las razones esgrimidas por Suárez Núñez procurando ocultar el fraude de los gubernamentales, eran de muy poco

peso. Las soluciones de fondo a los problemas cubanos no estaban en las elecciones sino en una profunda transformación revolucionaria por las organizaciones rebeldes.

Cuando el gobierno tuvo en sus manos los resultados electorales no vaciló un instante en aceptarlos como válidos sin detenerse a analizar las reclamaciones que habían surgido. El 3 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó una Ley de Convalidación Electoral para poner fin al proceso comicial porque entendían que: “[...] los términos correspondientes a los recursos que pudiesen establecer demorarían indefinidamente el proceso electoral”.²⁹

De esa manera le pasaban por arriba a aquellos incautos que pensaron que Batista podía propiciar elecciones honestas. Si el régimen no tenía escrúpulos para asesinar personas, menos escrúpulos tendría para cometer fraude. Y al veterano Grau, como no lo podían torturar y desaparecer tan fácilmente, en pago a sus críticas al proceso electoral, la Sala Segunda de lo Criminal de la Audiencia de La Habana abrió de nuevo la Causa 82 contra el ex presidente por haber malversado más de 174 millones de pesos durante su mandato. La causa pasó a manos de Carlos M. de la Cruz, quien le solicitó a Grau cuatro años de interdicción especial e indemnización de 3 950 pesos.³⁰ Así pagaba Batista a los políticos tradicionales después de haberlos usado para enmascarar su cruenta tiranía. En los seis años de gobierno bajo las bayonetas, el dictador nunca se había interesado en juzgar a Grau porque, además, ¿con qué moral podía hacerlo? Eran esas las consecuencias de una

república frustrada que no podía ofrecer un porvenir esperanzador a sus ciudadanos, por eso irrumpió la revolución como la carga necesaria convocada por Rubén Martínez Villena en ardientes versos.

Mientras por el camino de las elecciones se agotaban los recursos de la oposición electoralista, las organizaciones revolucionarias formulaban una estrategia dirigida a solucionar la crisis política cubana mediante el derrocamiento de la dictadura. En ese sentido, las acciones del Ejército Rebelde jugaron un papel trascendental. Las tropas, conducidas por el Comandante en Jefe Fidel Castro, se lanzaron a una ofensiva final que contemplaba: organizar nuevas columnas de combate tomando como base el núcleo fundamental del Primer Frente; ocupar el territorio enemigo y extender la guerra al resto de las provincias; hacer fracasar la farsa electoral de noviembre de 1958; aislar unas provincias de otras; atacar y rendir las pequeñas guarniciones y cercar las ciudades más importantes, y por último preparar a los trabajadores de todo el país para la huelga general revolucionaria a fin de neutralizar cualquier golpe de Estado.³¹ En esa etapa, comprendida entre septiembre y diciembre de 1958, se desarrollan las batallas decisivas por el triunfo de la revolución. La guerra se extendió por el país gracias al éxito que tuvo la invasión al occidente por parte de las columnas rebeldes dirigidas por Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara. En Oriente, por su parte, se desarrolló una campaña guerrillera muy activa que tuvo su punto culminante en la Operación Flor Crombet y en la Operación Santiago.

Notas

¹*Gente de la Semana* 5 oct. 1958:39.

²*Diario de la Marina* (La Habana) 9 oct. 1958:10-A, col. 7.

³*Ibídem*, 8 oct. 1958:10-A, col. 6.

⁴*Gente de la Semana* 12 oct. 1958:38.

⁵*Ibídem*, 9 oct. 1958:10-A, col. 2.

⁶*Ibídem*, 24 oct. 1958:10-A, col. 7, y 25 oct. 1958:10-A, col. 3.

⁷*Diario de la Marina* (La Habana) 25 oct. 1958:10-A, col. 3.

⁸Otras irregularidades vinculadas al robo de cédulas electorales se reportaron en Guantánamo donde se sustrajeron aproximadamente 5 000 cédulas de distintos barrios. En Puerto Padre se “notó la ausencia” de 12 038 cédulas. En el Cobre se reportó el robo de todos los carnés correspondientes a los barrios Aserradero, Cambute, Guamá, Hongolosongo, Dos Palmas, Manacas, Nima-Nima y Río Frío. Ver: *Diario de la Marina* (La Habana) 16 oct. 1958:10-A, col. 6-7-8.

Por otro lado, el delegado del PRC(A) ante el Tribunal Superior Electoral, Silvio Gómez, denunció en esa instancia jurídica que en las juntas municipales electorales de Consolación del Sur, San Juan y Martínez, Los Palacios, Pinar del Río, San Luis y Cabañas, integrantes de la Coalición Progresista Nacional obtenían mediante procedimientos tortuosos la entrega de los carnés electorales de un buen número de electores, y solicitó la designación de inspectores. Pero el Tribunal Superior Electoral designó como inspectores a los jueces de primera instancia de los partidos judiciales de los términos municipales que eran autoridades de menor rango y en algunos casos vinculados al fraude que se estaba cometiendo. Ver: *Diario de la Marina* (La Habana) 24 oct. 1958:10-A, col. 1-2.

⁹*Ibídem*, 15 oct. 1958:10-A, col. 1.

¹⁰*Ibídem*, 21 oct. 1958:10-A, col. 1-2.

¹¹*Ibídem*, 19 oct. 1958:1, col. 1-2.

¹²*Ibídem*, 26 oct. 1958:8-B, col. 5.

¹³*Ibídem*, 12 oct. 1958:10-A, col. 1-2.

¹⁴*Ibídem*, 30 oct. 1958:10-A, col. 7-8.

¹⁵*Idem*.

¹⁶*Ibídem*, 31 oct. 1958:10-A, col. 1.

¹⁷*Ibídem*, p. 1, col. 6 y p. 6-B, col. 8.

¹⁸*Ibídem*, 1 nov. 1958:1, col. 6.

¹⁹*Ibídem*, p. 10-A, col. 3.

²⁰*Gente de la Semana* 2 nov. 1958:84.

²¹*Diario de la Marina* (La Habana) 2 nov. 1958:12-A, col. 5.

²²La Constitución de la República en su artículo noventa y siete hizo obligatorio el ejercicio del sufragio que era universal, igualitario y secreto para todos los ciudadanos mayores de veinte años. El que dejare de votar sería objeto de las sanciones establecidas por la ley, con multa de una a treinta cuotas y se le incapacitaba para ocupar cargos, magistraturas o empleo público durante dos años.

²³*Diario de la Marina* (La Habana) 2 nov. 1958:1, col. 1.

²⁴*Ibídem*, 4 nov. 1958:1, col. 4 y 6-A.

²⁵*Ibídem*, 5 nov. 1958:10-A, col. 7.

²⁶*Ibídem*, 9 nov. 1958:83-84.

²⁷*Ibídem*, 16 nov. 1958:41.

²⁸*Ibídem*, 30 nov. 1958:5.

²⁹*Prensa Libre* (La Habana) 4 dic. 1958:14, col. 6.

³⁰*Ibídem*, 12 dic. 1958:1, col. 5 y p. 2, col. 2.

³¹El teniente coronel José R. Herrera, el mayor Enrique Buznego, la capitana Martha Verónica Álvarez y el licenciado Luis Rosado son los autores de: “El Comandante en Jefe Fidel Castro, fundador y guía de las FAR. Apuntes para el estudio de su pensamiento militar”. En: *25 años de luchas y victorias*. La Habana: Ed. Militar, 1983. pp. 15-16.

